



Los primeros ministros: el portugués, Marcelo Gaetano, y el inglés, Edward Heath.

españoles que están en el origen de la denuncia y de un misionero italiano, el padre Amedeo Brunelli, que ha enviado un informe a la Comisión de Derechos del Hombre. Según sus declaraciones al «Corriere della Sera» del 16 de julio, en el documento se indican nombres de pueblos destruidos por la aviación portuguesa y las tropas de tierra con napalm y las fechas concretas de cada acción. Dice que tiene datos acerca de una matanza de mujeres que atravesaban el río Geba para ir al entierro de Amílcar Cabral. «Con los aviones suministrados por la OTAN (helicópteros franceses y aviones alemanes), los portugueses han machacado en una profundidad de 20 kilómetros la zona situada a lo largo de la frontera del Senegal y en numerosos puntos de la frontera de Guinea». Otros testigos explican cuál es a su juicio la razón por la que el pueblo de Wiriyamu no figura en los mapas: ese es su nombre africano, y el nombre oficial es el de Wiliamo.

Con respecto a los sacerdotes españoles, el gobierno portugués ha explicado que difícilmente podrían haber sido testigos de los supuestos sucesos, porque en ese momento estaban encarcelados, y lo están aún. Llevan dieciocho meses en prisión y se espera que sean juzgados en septiembre. Esta declaración ha sido también utilizada contra el gobierno portugués, en el sentido de acusarle de mantener unas personas en la cár-

cel sin haber sido juzgadas durante tanto tiempo y por no precisar cuáles son las acusaciones que se les hacen. Se dice que los padres Martín Hernández y Alfonso Valverde fueron detenidos en enero de 1972. Trabajaban en la misión de Mukumbura y, según otros miembros de su orden, habían sido testigos de una matanza realizada por tropas rhodesianas en Mandue, un pueblo situado en las proximidades de Mukumbura, y que habían acudido a otros pueblos de la misma zona, de lo cual habrían informado al obispo.

Los dos sacerdotes están en la actualidad en la prisión de Lorenzo Marques. Han podido ser visitados en presencia de las autoridades y han manifestado que se encuentran en perfecto estado de salud y bien atendidos. Se supone que van a ser trasladados a Lisboa para ser juzgados, que del juicio se encargará la jurisdicción militar, pero que se celebrará a puerta cerrada. Es muy posible que se les acuse de estar de acuerdo con el FRELIMO —Frente de Liberación de Mozambique— y se les considere culpables de traición.

El doctor Gaetano ha prometido que nombrará una Comisión investigadora y que su informe se hará público. Esto no supone de ninguna manera que ni él ni ninguna de las autoridades portuguesas admitan la menor posibilidad de que se hayan cometido atrocidades en sus territorios coloniales.

EL DESPERTAR DE LOS CONTAMINADOS

«Nisshoken», el «derecho al Sol»; esa nueva reivindicación ha dominado la campaña electoral que precedió a la elección de ciento veinticinco miembros de la Asamblea Municipal de Tokio, celebrada el domingo pasado. Efectivamente, las elecciones locales son las únicas ocasiones en las que los ciudadanos pueden hacerse oír en este infierno ecológico que ha llegado a ser Japón. Y la importancia que los grandes partidos políticos han concedido a las elecciones municipales de Tokio resultó una tribuna excepcional.

«Nubes de humo cubren el cielo, no hay aceria en el mundo como la nuestra», dice el himno de la ciudad de Yuwata, en Kyushu, al Sur del archipiélago. Esto es una muestra de la ignorancia satisfecha de los campeones del desarrollo a cualquier precio, cuyas consecuencias hoy son las más lamentables condiciones de vida del mundo industrializado. Y los japoneses ya no creen en el milagro. Además del problema de la calidad de la vida ha aparecido hoy una crisis clásica: la inflación. Los precios han aumentado un 11,5 por 100 en un año: el kilo de carne cuesta 224 pesetas; las grandes sociedades especulan con todo, con el suelo, el arroz y las obras de arte. Los japoneses son conscientes de ser los primeros en un Estado cuya carencia resulta evidente frente al escándalo de su vida cotidiana.

¿Qué quieren estos japoneses, considerados como los hombres del año 2000? La respuesta puede verse en los rostros lastimosos y deshechos —son cuatro millones en el Gran Tokio— de los que se ven por la noche dormir de pie, apiñados en los trenes abarrotados que pasan cada dos minutos. Quieren una ciudad donde no tengan que perder cuatro horas al día en transportes, calles donde no corran el riesgo de ser uno de los cuatro muertos diarios en accidentes de circulación, casas donde no tengan que amontonarse tres en una habitación porque la especulación no hay quien la frene, aire y agua que no provoquen misteriosos males de los que la prensa cuenta cada día nuevas e innumerables víctimas.

En estos últimos meses, la contaminación ha llegado a proporciones desmesuradas. Las víctimas de asma se cuentan por centenares en Yokohama, Kawasaki o Yokkaichi, alrededor de Tokio. Incluso sin hablar de las célebres enfermedades, como «minamata» y el «itai itai», los japoneses están aterrados por las cifras de los contaminados: tienen diez veces más mercurio en el cuerpo que un americano; el cadmio está en todas partes, ensucia el arroz y las ostras; algunos tienen más plomo en la orina que los obreros profesionales; en cuanto a la leche materna, contiene proporciones alarmantes de insecticidas...

Por eso, los japoneses protestan. Nagoya, la tercera ciudad de Japón, es el mejor ejemplo de este despertar de los contaminados. Fue destruida durante la guerra y hoy es un modelo de expansión a la japonesa: altos edificios, pasos elevados, supermercados subterráneos. Pero alrededor de esos edificios se encuentra la auténtica Nagoya: casitas prefabricadas, pegadas la una a la otra, grises y grasas de hollín. Estos barrios reciben los humos del complejo petroquímico de Mitsubishi y los canales que atraviesan los suburbios transportan toneladas de mercurio. Los gases nocivos ya han contaminado a dos mil niños, que padecen de asma misterioso. Y por eso, el pasado mes de abril un socialista ha llegado a ser alcalde, en gran parte por el tema de la lucha contra la contaminación.

No queda prácticamente ni una sola ciudad en la costa del Pacífico que no tenga un alcalde elegido por una coalición social-comunista. Pero el poder del alcalde es débil frente al de la Asamblea Municipal, dominada a menudo por el partido gubernamental de los liberales-demócratas. Ese ha sido el caso de Tokio, donde la batalla electoral estuvo animada por dos hombres: Riokichi Minobe, alcalde socialista de Tokio desde 1967, de sesenta años de edad, antiguo profesor de Economía Política, que se convirtió en portavoz de las reivindicaciones de Tokio, y el primer ministro, Kakuei Tanaka, que puso todo su peso personal en la campaña para intentar recuperar algo de la popularidad que perdió y para evitar una derrota demasiado pesada al partido liberal-demócrata.

Desde hace poco, la vida política de Japón se ha polarizado. Se tiene la impresión de que solamente dos fuerzas políticas son capaces de llevar el país: los liberales-demócratas (PDL) y los comunistas (PCJ). Es cierto que el PCJ aún está lejos del poder, pero tras su llegada a las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, en las que obtuvo treinta y ocho escaños, se propuso un fin: demostrar que el PLD podía ser derrotado. Su «slogan»: «Una república popular en Tokio». Si el escrutinio no le fue tan favorable como preveían los sondeos, no por eso el PCJ dejó de ser el gran vencedor, al ganar seis escaños.

Este éxito se explica por la acción en profundidad que el PCJ ha llevado a cabo a nivel local. En cada barrio, el PCJ organizó movimientos de ciudadanos contra la contaminación, para la vivienda, contra la subida de precios. En todas partes evitó darles un fuerte tinte político. Para muchos japoneses, la única formación política que hay que defender es la de los abandonados por el desarrollo. ■ PHILIPPE PONS.